

China estrena mercado de derechos de emisiones e impuesto anticontaminación

Con el comienzo del año 2018, China ha estrenado dos normas que pretenden ayudar a reducir la contaminación y las emisiones de gases a la atmósfera



MEDIOAMBIENTE | CALIDAD DEL AIRE



ASIA | CHINA

PEKIN 18.01.2018

Apenas unos días antes de que el año 2017 tocara a su fin, China cumplía su promesa de poner en marcha un mercado de derechos de emisiones de gases de efecto invernadero como instrumento para contribuir a la reducción de éstas y con ello al cumplimiento de sus compromisos del Tratado de París.

Si se cumplen las previsiones, será el mayor mercado de este tipo en el mundo, superando al que ya funciona desde hace años en la Unión Europea, que es el ejemplo en el que se ha fijado China, y de donde ha extraído buena parte de los conocimientos y experiencias para desarrollar el suyo. La Unión Europea ha estado desarrollando en los últimos años un proyecto de cooperación para ayudar a China a poner en marcha esta iniciativa.

Este mercado a escala nacional sucede a las siete experiencias piloto que China estaba gestionando desde el año 2013, y que funcionaban a escala local en 7 ciudades o provincias (Pekín, Tianjin, Shanghai, Shenzhen, Guangdong, Changqing y Hubei).

Al menos en sus estadios iniciales, el mercado de emisiones chino sólo será aplicable a las empresas energéticas, sector que es el responsable de un tercio de las emisiones totales en este país. Las previsiones son que este mercado involucre a más de 1.700 empresas generadoras de energía, que emiten conjuntamente 3.300 millones de toneladas de carbono, y que los intercambios alcancen el volumen anual de 26.000 toneladas en el año 2020. El gobierno ha previsto un período transitorio de tres años para el funcionamiento real del sistema, plazo durante el cual esperan ir mejorando la regulación del mismo.

Al menos de momento han descartado la puesta en marcha de otros instrumentos como los mercados de futuros, al considerar que podría dar lugar a movimientos especulativos.

Por otra parte, el 1 de enero de 2018 marca la puesta en marcha de un nuevo impuesto anti-polución, al entrar en vigor la Ley del Impuesto de Protección Ambiental que llevaba dos años tramitándose. De acuerdo con esta Ley, tanto las empresas privadas como las entidades públicas que emitan contaminantes al ambiente en cualquier forma tendrán que abonar un impuesto a las autoridades locales.

Esta característica de alimentar las arcas de las administraciones locales se considera una de las principales virtudes del nuevo impuesto, ya que con ello pretende involucrar mucho más a las administraciones más próximas a los ciudadanos en la lucha contra la contaminación. Precisamente, la permisividad que muchas veces muestran estas autoridades es uno de los principales escollos del gobierno central para tratar de controlar el grave problema de la polución en China.

El nuevo impuesto sustituye a la tasa por vertidos que estaba en vigor desde 1979, que recaudó en 2015 un total de 17.300 millones de RMB (aproximadamente 2.220 millones de €) de un total de 280.000 industrias. En el antiguo sistema, una parte de la recaudación iba para el gobierno central, mientras que ahora será íntegramente para el gobierno local, que además tendrá la capacidad de modular la cuantía del impuesto. La nueva Ley elimina además algunas de las lagunas que permitían a los gobiernos locales eximir del pago a determinadas industrias.